

RECOMENDACIONES INTERNACIONALES A MÉXICO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS

Contrastes con la situación en el país



Compiladores:
Alejandro Anaya Muñoz
Alán García Campos



NACIONES UNIDAS
DERECHOS HUMANOS
OFICINA DEL ALTO COMISIONADO

México

Recomendaciones internacionales a México en materia de derechos humanos.
Contrastes con la situación en el país.

1ª Edición, 2014

DR© Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos
Alejandro Dumas No. 165, Col. Polanco
Del. Miguel Hidalgo
CP 11560, México, DF

Publicado por ONU-DH México

Edición y compilación: Alejandro Anaya (CIDE) y Alán García Campos
(ONU-DH México).

Coordinación editorial: Gabriela Gorjón Salcedo (ONU-DH México).

Diseño y formación editorial: Gabriela Gorjón Salcedo y Sandra Martínez Platas
(ONU-DH México).

El proyecto que hizo posible la compilación de estos trabajos fue realizado
con el apoyo de la Fundación MacArthur.

ISBN: 978-607-8296-06-4

Impreso en México

*El material contenido en esta obra puede citarse o reproducirse libremente, a condición
de que se mencione su procedencia y se envíe un ejemplar de la publicación que contenga
el material reproducido a la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).*

Límites y dificultades en la implementación de las recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos sobre la tipificación del feminicidio en México: primeras leyes y sentencias

*Patsilí Toledo Vásquez**

RESUMEN. Entre las múltiples recomendaciones de organismos internacionales en materia de derechos humanos a México en la última década, más de 200 tratan sobre la violencia contra las mujeres; de éstas, las recomendaciones referidas a la tipificación del feminicidio han sido particularmente debatidas a nivel jurídico y político. A pesar de ello, la tendencia continental de tipificación de esta nueva figura en gran parte de Latinoamérica, unida a diversos factores tanto políticos como jurídicos en México, han llevado a una generalizada introducción de este nuevo tipo penal en algunas entidades federativas mexicanas en los últimos años. La tipificación del feminicidio en México, al igual que ha ocurrido en el resto del continente, presenta una diversidad de formulaciones en cuanto a su contenido y extensión que, en algunos casos, resulta problemática. En efecto, algunos tipos penales más que facilitar el reconocimiento y sanción de esta forma extrema de violencia contra las mujeres, dificultan, restringen o incluso impiden la sanción penal de tales crímenes. La aplicación práctica de esta figura en algunas entidades federativas, asimismo, muestra que la tipificación apenas constituye una forma de cumplimiento formal de las recomendaciones y pone de manifiesto las dificultades que supone la implementación de las mismas.

ABSTRACT. In the last decade, Mexico has received numerous recommendations from international organs specialized in human rights, over 200 of which deal with violence against women. The recommendations related to the legal definition of the crime of femicide have been particularly controversial at the judicial and political level. In spite of that, the tendency to legally define this crime in most of Latin America, in addition to other political and legal factors in Mexico, have led to the generalized introduction of this new crime in different Mexican states in the past few years. The legal definition of femicides in Mexico, as in the rest of the continent, is very diverse in its content and scope, which in some cases is problematic. In fact, some of the criminal offenses that have been established hamper, limit or even preclude criminal sanction against such crimes. Application in practice of this criminal provision in some Mexican states shows that the legal definition of a crime is only one way of complying with recommendations from international bodies, emphasizing the difficulties and the limitations of the implementation of recommendations regarding criminalization of femicides in Mexico.

* Patsilí Toledo Vásquez es doctora en Derecho Público por la Universidad Autónoma de Barcelona (España), integra el Grupo de Investigación “Copolis” de la Universidad de Barcelona y es profesora asociada en género y criminología en la Universidad Pompeu Fabra (Barcelona). Ha sido también profesora e investigadora invitada en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Su investigación doctoral (de próxima publicación) versó sobre los procesos de tipificación del femicidio/feminicidio en países latinoamericanos, materia en la cual ha escrito diversos artículos y ha participado en múltiples conferencias en Latinoamérica y Europa.

Introducción: Las recomendaciones de carácter legislativo en materia de violencia contra las mujeres

Las recomendaciones formuladas por organismos internacionales en materia de derechos humanos a los Estados Partes de los diversos tratados, son medidas concretas que les cabe adoptar para el desempeño de sus obligaciones en virtud de los tratados correspondientes, de acuerdo a los principios de buena fe y de *pacta sunt servanda*.

En materia de violencia contra las mujeres¹, diversos organismos internacionales de derechos humanos, tanto del sistema universal como interamericano, han formulado más de doscientas recomendaciones a México en la última década². Tales recomendaciones comprenden tanto aspectos de políticas públicas como reformas legales y judiciales, encaminadas a mejorar la respuesta del Estado frente a este tipo violencia, incluyendo su prevención, sanción, reparación y el avance hacia su erradicación.

Como en otras materias, los aspectos legislativos son relevantes en estas recomendaciones, pues los Estados básicamente se organizan a partir de la legislación que adoptan, herramienta esencial para lograr la adecuada garantía de los derechos humanos, aún cuando se requieran también medidas administrativas y políticas que den efectividad a su contenido. Por ello el cumplimiento de los tratados internacionales de derechos humanos incluye la obligación de dictar leyes o adoptar las medidas legislativas necesarias para asegurar el goce de los derechos humanos³. La inexistencia de leyes en ciertas materias, en consecuencia —así como las leyes inadecuadas— puede suponer un incumplimiento de las obligaciones del Estado de respetar y garantizar los derechos humanos.

En la medida que la violencia contra las mujeres atenta contra bienes jurídicos fundamentales —como la vida y la integridad de las mujeres—, es lógico que estas recomendaciones frecuentemente aborden aspectos legislativos de carácter penal. Frecuentemente, instan a la supresión o modificación de

¹ La *Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer* o *Convención de Belém do Pará* (Organización de Estados Americanos, 1994), define en su art. 1º la violencia contra la mujer como “cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”.

² Fuente: Base de datos de Recomendaciones Internacionales a México en Materia de Derechos Humanos. Esta base de datos ha sido desarrollada por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), y comprende todas las recomendaciones incluidas en los informes sobre México elaborados por los órganos de tratados y procedimientos especiales de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, desde 1994 a la fecha. Disponible en www.recomendacionesdh.mx

³ Por ejemplo, el art. 2.2 del *Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos* (PIDCP) señala: “Cada Estado Parte se compromete a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones del presente Pacto, las medidas oportunas para dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en el presente Pacto y que no estuviesen ya garantizados por disposiciones legislativas o de otro carácter”. La *Convención Americana de Derechos Humanos* (CADH), en tanto, señala en su art. 2 “Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno. Si en el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades”. En relación específicamente con violencia contra las mujeres, el art. 7 letra c) de la *Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer* (*Convención de Belém do Pará*), incluye las obligaciones legislativas de los Estados en la materia.

ciertos delitos –si es legislación incompatible con el tratado de que se trate⁴, por ejemplo, por su carácter discriminatorio- y más excepcionalmente, recomiendan la penalización de nuevas conductas.

Las transformaciones así promovidas son parte de la evolución histórica que el Derecho –y el Derecho penal en particular- ha experimentado en esta materia. En efecto, muchos de los diversos fenómenos que se califican actualmente como formas violencia contra las mujeres e ilícitos penales –como el maltrato en la esfera doméstica, el acoso u hostigamiento sexual, la violación marital, etcétera.- han sido en el pasado comportamientos más o menos tolerados, tanto social como jurídicamente, en la mayor parte del mundo occidental⁵. Ello también se ajustaba a normas civiles que por ejemplo, en materia de familia, fundaban el matrimonio en la autoridad marital –incluyendo el derecho de corrección del marido sobre la mujer, hijos e hijas⁶ y las prerrogativas sexuales del marido sobre la mujer que impedían considerar la violación dentro del matrimonio- y desconocían la plena capacidad a las mujeres casadas.

Reconocer la importancia de esta regulación histórica es fundamental para la comprensión de la violencia *contra las mujeres* como una forma cualitativamente diferente y específica de violencia *de género* (o violencia basada en el género o por razones de género), que incluye la violencia que se dirige a cualquier persona por su condición de género⁷, a quienes se apartan de lo que se considera correcto o adecuado en términos de roles sociales asignados a hombres y mujeres⁸. Pero la violencia *contra las mujeres*, en la medida que ha contado históricamente con un respaldo jurídico basado en la subordinación de las mujeres a los hombres, es una forma específica y calificada de violencia de género, y más severa que cualquier otra en cuanto a su extensión, intensidad y consecuencias⁹.

⁴ De acuerdo a la norma básica del derecho internacional público por la cual las normas nacionales no pueden ser invocadas para incumplir un tratado internacional (*Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados*: art. 27).

⁵ Entre ellos, por ejemplo, se encuentra el uxoricidio, por el cual se atenuaba sustancialmente la sanción penal del marido que mataba a su cónyuge adúltera, así como el delito de adulterio como ilícito que sólo podía ser cometido por la mujer (no por el marido), la extinción de la responsabilidad penal del violador por el posterior matrimonio con la ofendida, etc. También se regulaban los casos en que las mujeres –o algunas de ellas- contarían con amparo jurídico frente a ciertas formas de violencia en base a consideraciones sociales vinculadas a su papel como madres, esposas o hijas, como por ejemplo, las mujeres de “buena fama” u “honestas”, en relación con ciertos delitos sexuales. (Acale, 2006; Bodelón, 2012: 15).

⁶ Basado en el deber de obediencia establecido en los mensajes bíblicos y recogido en los primeros cuerpos normativos como las Siete Partidas, el Ordenamiento de Alcalá, las Ordenanzas de Castilla y las Leyes de Toro. Si bien el derecho canónico llegaba a declarar la procedencia del divorcio por el “castigo cruel” que el marido diera a la esposa, el castigo “moderado” era social y jurídicamente aceptado, tanto por la doctrina como por la praxis judicial. Por ejemplo, en el Virreinato del Río de la Plata, en 1795, se sostenía que “el marido puede corregir moderadamente a su mujer, ya con azotes, ya con bofetones, por defectos de poca consideración” (Kluger, 2003). En el derecho anglosajón, en la década de 1870, los tribunales en Estados Unidos dejaron de reconocer el principio de *common-law* de acuerdo al cual se consideraba que este principio estaba recogido en la codificación del *Common Law* de Blackstone de 1768 (Gelles, 1997: 22). En el Reino Unido, el derecho tradicional del marido de infligir castigo físico moderado a su mujer fue removido a partir del caso *R. v Jackson*, en 1891 (Stevens and Sons, 1935: 47).

⁷ Normalmente ejercida contra quienes poseen orientación o identidades de género distintas a las dominantes, como ocurre con lesbianas, gays, personas intersexuales, transexuals o transsexuales. Pero la violencia por razones de género también puede afectar a hombres que ajustan su conducta al modelo heterosexual dominante, como ocurriría en los casos de reclutamiento de niños en fuerzas armadas, en que son forzados a reproducir los patrones de género dominantes.

⁸ Juliano, 2006: 25.

⁹ Como lo demuestran los cada vez más frecuentes estudios respecto de los homicidios de mujeres por razones de género y su

La eliminación de aquellas normas discriminatorias –tanto civiles como penales- ha sido un proceso lento e inacabado en muchos países, especialmente en Latinoamérica.

Por ello, aún en 2012 el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW), en su revisión del informe mexicano sobre el cumplimiento de la *Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer* (CEDAW) ha insistido sobre la necesidad de eliminar las disposiciones discriminatorias que existen en la legislación de diversas entidades federativas, en particular las normas penales relativas a la violación, los homicidios “por honor”¹⁰, el adulterio y otros delitos.¹¹

La derogación de estas normas es fundamental, pero también las normas internacionales pueden obligar a los Estados a tipificar como delito ciertas conductas. Algunos tratados, como las convenciones contra la tortura¹² o la desaparición forzada de personas¹³, establecen específicamente la forma en que los Estados deben tipificar ciertas figuras penales. Otros, como la *Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer* o *Convención de Belem do Pará*, aunque obligan a la adopción de medidas específicas para combatir esta forma particular de violencia, no señalan de forma precisa.¹⁴

Por ello, entre las más de 70 recomendaciones respecto del feminicidio provenientes de organismos del sistema interamericano y universal de derechos humanos¹⁵ y, dentro de las que aluden a reformas legislativas, probablemente las más controvertidas, tanto desde una perspectiva jurídica como política, han sido las que el Comité CEDAW y el Comité de Derechos Humanos (CDH) han pronunciado instando por la tipificación del delito de feminicidio en México¹⁶.

sostenido incremento (Carcedo, 2010; Adolff *et al.*, 2010; CIRS, 2007; UNODC, 2011; Consejo DHNU, 2012).

¹⁰ Aún actualmente los códigos penales de seis entidades federativas mexicanas -Baja California Sur, Chiapas, Jalisco, Michoacán, Yucatán y Zacatecas- contemplan el “homicidio por razón de honor” como figura penal privilegiada, atenuando sustancialmente la pena de quien mate a su cónyuge en situación de adulterio (Incháustegui y López, 2011 : 25). Estas disposiciones constituyen un resabio de la figura del uxoricidio y aunque formalmente puedan ser neutras en cuanto a género, su aplicación práctica se limita fundamentalmente a los homicidios de mujeres, pues ellas son las principales víctimas de los homicidios en contextos de relaciones de pareja y familia (Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito [UNODC], 2011: 11).

¹¹ Comité CEDAW, 2012: párr. 13.

¹² La *Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes*, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1984, y la *Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura*, adoptada por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) el 9 de diciembre de 1985.

¹³ La *Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas*, adoptada por la Asamblea General de la OEA el 9 de Junio de 1994, y la *Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas*, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 20 de diciembre de 2006.

¹⁴ Debe considerarse, además, que no todas las conductas comprendidas en el concepto de violencia contra las mujeres de la *Convención de Belem do Pará* deban necesariamente tener una sanción penal.

¹⁵ Se han emitido 77 recomendaciones en torno al feminicidio, desde el año 2002 a la fecha, la mayor parte de ellas relativas a la prevención e investigación de los crímenes, así como sanción de los responsables, medidas de reparación, etc. (www.recomendacionesdh.mx).

¹⁶ De entre las 17 recomendaciones dirigidas al Poder Legislativo (www.recomendacionesdh.mx), sólo tres apoyan expresamente la tipificación del feminicidio: las del Comité CEDAW en 2006 y 2012, y del Comité de Derechos Humanos en 2010.

Las recomendaciones sobre el fenómeno del feminicidio y su tipificación

Los neologismos feminicidio y femicidio¹⁷ han sido adoptados por el feminismo latinoamericano a partir de la traducción de la expresión inglesa *femicide*,¹⁸ categoría de análisis que, en general, incluye todos los homicidios de mujeres cometidos por razones de género, es decir, aquellos que constituyen una manifestación extrema de violencia contra las mujeres.¹⁹ Este concepto se ha extendido a diversas regiones del mundo, siendo utilizado especialmente en investigaciones académicas feministas.²⁰

En Latinoamérica, el uso de la expresión feminicidio se ha generalizado en México y en gran parte de la región desde mediados de la década de 1990, principalmente a partir de la denuncia de múltiples casos de desapariciones y cruentos homicidios de mujeres en el estado de Chihuahua, en particular en Ciudad Juárez, caracterizados por violencia sexual o física extrema²¹ así como por la impunidad que los ha rodeado. Estos casos han dado lugar a múltiples pronunciamientos y recomendaciones de organismos nacionales e internacionales²², siendo de especial relevancia jurídica la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en el emblemático caso *Campo Algodonero* que condenó al Estado mexicano por no garantizar el derecho a la vida, integridad y libertad de las víctimas, así como por la impunidad y discriminación que afectó a las víctimas y sus familiares.²³

Si bien éstos han sido los casos más ampliamente reconocidos, el feminicidio comprende todos los homicidios de mujeres cometidos por razones de género, ya sean cometidos por conocidos o desconocidos, en el ámbito público o privado. En este sentido amplio, el concepto de femicidio o feminicidio ha sido desarrollado y utilizado en diversos contextos y regiones de México

¹⁷ Si bien durante algunos años ha habido debate teórico y político respecto de ambas expresiones –desde consideraciones lingüísticas hasta políticas–, en la actualidad –y en gran parte a causa de las leyes que se han adoptado en los diversos países– resultan ser prácticamente expresiones sinónimas, para aludir a los homicidios de mujeres por razones de género.

¹⁸ Russell y Caputi, 1990.

¹⁹ Esta es una definición que contempla los elementos más frecuentemente utilizados, a pesar de que existen una gran diversidad de conceptualizaciones, algunas más amplias y otras más restrictivas (Crawford y Gartner, 1992; Campbell y Runyan, 1998; Carcedo y Sagot, 2000; Russell y Harmes, 2001; Lagarde, 2005; Russell y Radford, 2006, etc.)

²⁰ Landau y Hattis-Rolef, 2001; Hosseini, 2009; Kumar, 2009.

²¹ Para distinguir las características propias de los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez –y Chihuahua– se han utilizado expresiones y descripciones específicas, como “feminicidio sexual sistémico” (Monárrez, 2009) o feminicidios “idiosincrásicos de Ciudad Juárez” (Segato, 2006).

²² El *Compendio de Recomendaciones sobre el feminicidio en Ciudad Juárez, Chihuahua*, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A. C. (2007), incluye 292 recomendaciones emitidas por organizaciones nacionales e internacionales de la sociedad civil y por organismos del Sistema Interamericano, Naciones Unidas, Consejo de Europa y de organismos descentralizados de la administración federal mexicana.

²³ Corte IDH. *Sentencia del caso González Banda y otras (“Campo Algodonero”) vs. México*, de 16 de noviembre de 2009.

y la mayor parte de Latinoamérica²⁴ y encuentra una incipiente utilización en España²⁵ e Italia²⁶.

Aunque los conceptos de “feminicidio/femicidio” han sido nociones desarrolladas en el ámbito de la sociología y antropología feminista, las reivindicaciones del activismo feminista al respecto en Latinoamérica han incluido desde temprano su tipificación penal como delito específico, siendo éste un rasgo particular de su desarrollo político en esta región. En 1999, en Costa Rica se presentó el primer proyecto de ley para tipificar el femicidio como un delito específico a nivel latinoamericano, y en 2004 la primera iniciativa de tipificación del feminicidio en México, promovida por la académica feminista y entonces diputada federal Marcela Lagarde.²⁷

Aunque tal iniciativa no resultó aprobada, poco tiempo después se presentó una nueva propuesta de tipificación a nivel federal, contenida en la iniciativa de la *Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia* (en adelante, Ley General²⁸), presentada en febrero de 2006. Mientras se encontraba pendiente la tramitación de esta iniciativa, el Comité CEDAW revisó la situación de México y sus Observaciones Finales se convirtieron en el primer pronunciamiento de un organismo internacional en que expresamente se apoyaba la tipificación de esta nueva figura, al señalar “El Comité insta al Estado Parte a que acelere la aprobación de la enmienda del Código Penal para tipificar el feminicidio como delito (...)”²⁹.

A pesar de ello, ésta y otras iniciativas tendientes a la tipificación del feminicidio o femicidio han encontrado una fuerte oposición, especialmente en la esfera académica, tanto en México como en otros países latinoamericanos. Entre las principales objeciones, se ha insistido sobre la suficiencia de las normas ya existentes para sancionar estos crímenes –homicidio, homicidio agravado por el vínculo, etc., pues poseen rangos de penalidad que permiten sancionar más

²⁴ Entre otros: Monárrez, 2000; Red Chilena contra la Violencia Doméstica y Sexual y Corporación La Morada, 2004; Lagarde, 2005; Maldonado, 2005; Instituto Interamericano de Derechos Humanos y Consejo Centroamericano de Procuradores de Derechos Humanos, 2006; Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz, 2006; Segato, 2006; CLADEM, 2008; Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, 2008, 2010 y 2011; Carcedo, 2010; Fregoso y Bejarano, 2010; González-Méndez y Santana-Hernández, 2012, etc.

²⁵ En España, los informes sobre víctimas mortales de la violencia de género del Consejo General del Poder Judicial español utilizan la expresión *femicidio* pero restringida únicamente a “la muerte violenta de la mujer ocasionada por quien sea o haya sido su cónyuge o persona a la que esté o haya estado ligado por análoga relación de afectividad a la conyugal, siendo el sujeto activo varón” (CGPJ, 2011 : 7). En organizaciones feministas posee una utilización en un sentido más amplio (Laporta, 2013). Ver también Instituto Centro Reina Sofía, 2007 y 2010.

²⁶ Karadole, 2007; Giari, 2008; Adolfi et al., 2010; Spinelli, 2006.

²⁷ *Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona al Libro Segundo del Código Penal Federal el Título Vigésimo Octavo, “De Los Delitos de Género”, y los Artículos 432, 433 Y 434, para tipificar el delito de Feminicidio; y adiciona un numeral 35 al Artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales y una Fracción VI al Artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, suscrita por las Diputadas Marcela Lagarde y de los Ríos, Eliana García Laguna y Rebeca Godínez y Bravo*. Fue presentada a tramitación legislativa el 7 de diciembre de 2004.

²⁸ La iniciativa fue presentada por las diputadas Marcela Lagarde, Angélica de la Peña y Diva Hadamira Gastélum el 2 de febrero de 2006. La Ley General fue aprobada en diciembre del mismo año y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1º de febrero de 2007.

²⁹ Comité CEDAW, 2006: párr.15

severamente los casos más graves; asimismo, se ha considerado que el delito de femicidio o feminicidio constituiría una norma discriminatoria hacia los hombres, pues supondría dar un mayor valor a la vida de las mujeres, lo que provocaría conflictos de constitucionalidad evidentes³⁰, así como el riesgo de introducción de normas propias de “derecho penal de autor”. Estas críticas, sin embargo, no son exclusivas de estas iniciativas, sino que han sido compartidas por otras normas en el derecho comparado que sancionan de forma separada y agravada la violencia contra las mujeres, como la legislación sobre violencia de género en España desde 2004³¹.

De este modo, a pesar de la recomendación del Comité CEDAW a México en 2006, la Ley General fue aprobada sin tipificar el feminicidio ni ninguna otra figura penal. Posteriormente, la necesidad de trabajar por la armonización de la Ley General en las diversas entidades federativas dejaron de lado las demandas por la tipificación del feminicidio en México durante un tiempo.

En el ámbito internacional, en 2007 fue aprobada en Costa Rica la primera ley que tipificó el femicidio en la región³² y se presentó un proyecto de ley para la tipificación del femicidio en Chile.³³ En 2008 se tipificó el femicidio en Guatemala,³⁴ tomando como base el tipo penal propuesto —y no aprobado— en la iniciativa original de la Ley General mexicana, y en Colombia se agravó la penalidad del homicidio que “se cometa contra una mujer, por el hecho de ser mujer”,³⁵ aunque sin llamarlo femicidio.

En 2009, la CoIDH dictó sentencia en el caso *Campo Algodonero* condenando al Estado mexicano, y utilizando la palabra “feminicidio”, pero sin aludir a la necesidad o conveniencia de tipificar esta figura como un delito específico, pues sus disposiciones se centraron en el mejoramiento de los procesos de investigación de las desapariciones, violencia sexual y homicidios de mujeres en México, la sanción a los responsables del tratamiento negligente de los casos, así como medidas generales para erradicar la discriminación y violencia contra las mujeres.

³⁰ Durante la tramitación legislativa de la ley que tipificó el femicidio en Costa Rica (entre 1999 y 2007) este fue un aspecto insistentemente abordado por quienes cuestionaban la constitucionalidad de esta normativa, debate similar al que se produjo a nivel político y mediático respecto de la tipificación del femicidio en Chile en 2010.

³¹ Por ejemplo, la crítica de Gimbernat (2004) a la *Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la violencia de género*, precisamente la califica como un ejemplo de “derecho penal de autor”. En similares términos se había pronunciado el Dictamen del Consejo General del Poder Judicial español (CCPJ) al “Anteproyecto de Ley Orgánica integral de medidas contra la violencia ejercida sobre las mujeres”, de 24 de junio de 2004 (CGPJ, 2004). En contra de esta crítica, entre otras: Laurenzo (2005), Maqueda (2006), Larrauri (2009), Bodelón et. al. (2009).

³² A través de la *Ley para la Penalización de la Violencia contra las Mujeres* N.º 8589, aprobada por la Asamblea Legislativa el 12 de abril de 2007, y publicada el 30 de mayo de 2007. Fue la primera ley que tipificó el femicidio a nivel latinoamericano.

³³ Boletín N.º 4937-18, Proyecto de Ley que Modifica el Código Penal y el Decreto Ley N.º 321, de 1925, para sancionar el ‘femicidio’, y aumentar las penas aplicables a este delito. Presentado a tramitación legislativa el 3 de abril de 2007.

³⁴ *Ley contra el Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer*. Decreto N.º 22-2008 del Congreso de la República de Guatemala, publicado en el Diario de Centro América el 7 de mayo de 2008.

³⁵ De acuerdo a la Ley N.º 1257 de 2008, por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial 47.193 de 4 de diciembre de 2008.

Al año siguiente, sin embargo, el Comité de Derechos Humanos volvió a poner la tipificación del feminicidio en debate, al señalar en sus recomendaciones a México que:

El Estado parte debe intensificar aún más sus esfuerzos para combatir la violencia contra la mujer, incluso abordando las causas profundas de este problema. En particular debe: (...) b) Tipificar el feminicidio en la legislación, incluso a nivel estatal (...)³⁶.

Durante 2010, la tipificación del femicidio/feminicidio comenzó a tener un nuevo auge: fue tipificado en Chile³⁷, El Salvador³⁸ y en el Estado mexicano de Guerrero, que se convirtió en la primera entidad federativa en tipificar este delito, en diciembre de 2010³⁹. En 2011 se tipificó el feminicidio en Nicaragua y Perú, y durante 2012 el femicidio fue tipificado también en Argentina.

Más allá de sus diversas denominaciones —ya sea como feminicidio o femicidio—, estas figuras presentan características particulares en cada país, habiendo países que abordan en forma amplia el femicidio / feminicidio —con diversos elementos—, y otros que únicamente sancionan como tal el que ocurre en la esfera íntima o de pareja —con diversas restricciones—. Estas diferencias de contenido son comprensibles al considerar los femicidios / feminicidios en los contextos específicos en que suceden, atendiendo a las dinámicas económicas y sociopolíticas, así como a los patrones globales de la violencia basada en el género y a cómo la naturaleza del femicidio afecta a una comunidad, un país o a una región en particular.⁴⁰ Sin embargo, tal *especificación* del femicidio / feminicidio en cada región o país también dificulta la recopilación y la comparación de información entre los diversos países.

En México, especialmente desde principios de 2011, diversos factores han animado la tipificación del feminicidio, con diversas características en los diversos Estados, como se verá a continuación. En este nuevo contexto, las Observaciones Finales del Comité CEDAW de agosto de 2012, han sido más específicas, señalando que:

[El Comité recomienda al Estado parte:] Adoptar las medidas necesarias para garantizar que la codificación del feminicidio se base en elementos objetivos que permitan su adecuada calificación en los códigos penales locales; acelerar su codificación en esos códigos penales pendientes; normalizar los protocolos de investigación policial para el feminicidio en todo el país; e informar sin demora a las familias de las víctimas (...)⁴¹.

³⁶ Comité de Derechos Humanos, 2010: párr. 8b

³⁷ Chile, Ley N° 20.048, aprobada el 26 de octubre y publicada en el Diario Oficial el día 18 de diciembre de 2010.

³⁸ El Salvador, *Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres*, Decreto N° 520, de 25 de noviembre de 2010. Su entrada en vigor, sin embargo, se inició en enero de 2012.

³⁹ En febrero de 2008, el estado de Guerrero había aprobado su *Ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia*, en la que se introdujo legalmente el concepto de *feminicidio*, pero sin tipificarlo como delito.

⁴⁰ Widyono, 2009: 21.

⁴¹ Comité CEDAW, 2012: párr. 19.a

Las recomendaciones del Comité CEDAW y del Comité de Derechos Humanos a México sobre la tipificación del feminicidio han sido factores relevantes en estos procesos de tipificación, sumándose a otros factores, tanto jurídicos como políticos que han favorecido esta tendencia legislativa en todo el Estado mexicano.

En lo jurídico, la *Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia* -en vigor desde febrero de 2007- promovió las reformas penales en la materia, al incluir la obligación de todas las entidades federativas de adecuar su legislación, incluyendo la introducción de reformas “para establecer como agravantes los delitos contra la vida y la integridad cuando éstos sean cometidos contra mujeres, por su condición de género”⁴².

Asimismo, la reforma constitucional -de junio de 2011- que supuso el reconocimiento de rango constitucional a las normas de derechos humanos contenidas en los tratados internacionales⁴³ en México, ha sido fundamental al consolidar la fuerza jurídica de los instrumentos internacionales existentes en que se basan las leyes que sancionan específicamente la violencia contra las mujeres, en particular la *Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer*, (*Convención Belém Do Pará*), lo cual ha constituido un importante respaldo normativo a las demandas feministas por la tipificación. En efecto, tanto en México como en el resto de la región, la demanda por la tipificación del femicidio/feminicidio se ha planteado, desde sus inicios, en el marco del derecho internacional de los derechos humanos, marco que permite justificar leyes género-específicas, tanto por la obligación general de los Estados de garantizar los derechos sin discriminación —a la vida y la integridad física, entre otros- como por las obligaciones específicas de los Estados del continente respecto al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

Asimismo, la legislación sobre feminicidio ya cuenta con respaldo a nivel jurisprudencial en México, encontrándose ya un pronunciamiento judicial respecto a la legislación del Distrito Federal, en que se reconoce que tal figura “cumple con los criterios de objetividad-constitucionalidad, racionalidad y proporcionalidad que, justifica el trato diferenciado y de mayor tutela de los bienes jurídicos concernientes a la vida de la mujer y su dignidad, cuando estén en peligro o sean lesionados en ciertas circunstancias, ello en contraste a lo que acontece con el delito de homicidio propiamente dicho, de ahí la necesidad y justificación de su creación, a fin de prevenir y combatir tal problemática con mayor eficacia, por ello, el feminicidio no viola el principio de igualdad jurídica del hombre y la mujer, pues dicho principio debe entenderse como la exigencia constitucional de tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales”⁴⁴.

⁴² El art. 8º transitorio de la Ley General señala: En un marco de coordinación, las Legislaturas de los Estados, promoverán las reformas necesarias en la Legislación Local, previstas en las fracciones II [relativa a “ejercer sus facultades reglamentarias para la aplicación de la presente ley”]; y XX [relativa a “impulsar reformas, en el ámbito de su competencia, para el cumplimiento de los objetivos de la presente ley, así como para establecer como agravantes los delitos contra la vida y la integridad cuando estos sean cometidos contra mujeres, por su condición de género] del artículo 49, dentro de un término de 6 meses, contados a partir de la entrada en vigor de la presente Ley.

⁴³ Reforma incorporada en el art. 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por decreto aprobado por el Senado el 3 de marzo de 2011 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011.

⁴⁴ Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. Amparo en revisión 83/2012. 20 de septiembre de

A estos factores jurídicos se han sumado factores políticos, pues la masiva aprobación de leyes que tipifican el feminicidio ha respondido también al contexto electoral previo a las elecciones presidenciales de julio de 2012 en México. En tal contexto, las denuncias de organizaciones de mujeres frente al feminicidio han dado lugar a rápidas respuestas legislativas en diversas entidades y la aprobación de las leyes de feminicidio ha tenido gran fuerza política y mediática, siendo promovidas —en diversas formulaciones— por gobiernos de todos los partidos.

Las leyes que tipifican el feminicidio en México y los contextos en que surgen

A diciembre de 2012, el delito de feminicidio se ha tipificado veintidós de las treinta y dos entidades federativas mexicanas, así como a nivel federal.⁴⁵ Aunque algunas de estas leyes son muy similares entre sí —pues algunos estados han tomado como base las iniciativas o leyes aprobadas en otras entidades o la legislación federal—, existen también importantes diferencias.

Algunos modelos de tipificación han sido fuertemente cuestionados por las organizaciones activistas contra el feminicidio,⁴⁶ en particular, aquellos tipos penales que incorporan elementos subjetivos de difícil acreditación. El Comité CEDAW ha acogido estos cuestionamientos y, en sus recomendaciones a México de 2012, destacó expresamente la importancia de “garantizar que la codificación del feminicidio se base en elementos objetivos que permitan su adecuada calificación en los códigos penales locales (...)”⁴⁷. El Comité no alude a la diversidad de tipos penales como un problema en sí —consecuencia de la normal variedad normativa en un Estado federal como México—, pero evidentemente su recomendación toma como base esta diversidad.

La pluralidad de tipos penales de feminicidio y los particulares rasgos de la tipificación de algunos de ellos, sin embargo, también responde a los contextos sociales y políticos que han determinado estos procesos legislativos. Así, la oportunidad y celeridad de la aprobación de varias de estas leyes, la intervención o no del movimiento de mujeres en su elaboración, así como en que algunas de ellas resulten ser normas difícilmente aplicables en lo penal, son todas cuestiones que se vinculan a los diversos escenarios y opciones políticas en las diversas entidades federativas.

Al respecto, es necesario considerar que la denuncia del feminicidio desde el activismo feminista y el movimiento de mujeres en México no ha sido sólo la de ciertos crímenes violentos y sexistas, sino principalmente una denuncia de la impunidad⁴⁸, es decir, de la inactividad o falta de diligencia

2012. [TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 2; Pág. 1333.

⁴⁵ Hasta diciembre de 2012, el *feminicidio* se ha tipificado como delito en Guerrero, el Estado de México, Guanajuato, Tamaulipas, Morelos, el Distrito Federal, San Luis Potosí, Veracruz, Colima, Chiapas, Durango, Tlaxcala, Tabasco, Sinaloa, Baja California, Oaxaca, Jalisco, Coahuila, Puebla, Campeche, Nayarit y Quintana Roo.

⁴⁶ Como se desprende del informe sombra presentado por organizaciones del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) ante el Comité CEDAW *Feminicidio e impunidad en México: Un contexto de violencia estructural y generalizada*, de fecha 17 de julio de 2012.

⁴⁷ CEDAW, 2012: párr. 19.a.

⁴⁸ En efecto, la referencia a la impunidad como parte del concepto de feminicidio ha sido especialmente trabajada en México —en particular por Marcela Lagarde—, y este elemento se ha considerado como la principal diferencia entre las palabras *femicidio* y *feminicidio* a nivel latinoamericano.

del Estado –con sesgos discriminatorios- en la investigación y sanción de estos crímenes, como ha sido claro, por ejemplo, en el caso *Campo Algodonero*. Por ello, los principales interpelados por esta denuncia han sido los organismos estatales y sus autoridades –tanto en las diversas entidades federativas, como a nivel nacional- y así lo reflejan los múltiples pronunciamientos en esta materia desde organismos internacionales de derechos humanos.

A este marco debe sumarse, especialmente desde 2011, un contexto político marcado por las elecciones presidenciales de julio de 2012 en México y, por tanto, muy sensible a las denuncias de las organizaciones de mujeres relativas al feminicidio. En el Estado de México, por ejemplo, las autoridades habían sido expresamente cuestionadas desde las organizaciones del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) por la impunidad de los feminicidios en dicha entidad federativa.⁴⁹ Tales cuestionamientos fueron el antecedente de diversas medidas en torno al feminicidio promovidas por el gobierno del entonces precandidato presidencial Enrique Peña Nieto, incluyendo una iniciativa de tipificación que fue aprobada por el Poder Legislativo de la entidad en apenas 10 días.⁵⁰

En el Distrito Federal, el Jefe de Gobierno y también precandidato presidencial Marcelo Ebrard, presentó a tramitación una iniciativa para tipificar el feminicidio elaborada con la participación de las organizaciones del OCNF, el mismo día que hacía lo propio en el Estado de México el precandidato Peña Nieto, lo que muestra la relevancia del momento político-electoral en el impulso de tales iniciativas.⁵¹ Luego, la gran repercusión mediática de estas iniciativas y leyes contribuyó también a animar los procesos de tipificación en otras entidades federativas.

El peso de estos factores políticos también se expresa en el contenido de las leyes, esto es, en las diversas formas en que se ha tipificado el feminicidio en las entidades federativas. En tal sentido, no es llamativo que una característica común a todas las legislaciones actualmente aprobadas en las diversas entidades es que todas ellas han eliminado la referencia a la responsabilidad de los agentes estatales en la adecuada investigación y sanción de estos crímenes. Por el contrario, se ha aprobado una preocupante disposición en el estado de Durango –al tipificar el feminicidio-, que busca exculpar los feminicidios cometidos por autoridades “en ejercicio de sus funciones”:

⁴⁹ Organizaciones del OCNF habían solicitado la declaración de “alerta de violencia de género”, indicando que, de los 922 homicidios dolosos contra mujeres cometidos entre enero de 2005 y agosto de 2010 en dicha entidad federativa, “las autoridades ignoran o desconocen quién es el homicida en el 56.72% de los crímenes y sólo en los casos donde el asesinato fue cometido por una persona conocida (pareja, familiar o vecino), la autoridad conoce la identidad del victimario (35.47%). Sin embargo, la solicitud resultó desestimada (Gómez, 2011, 12 de enero).

⁵⁰ Decreto N.º 272, publicado en la “Gaceta del Gobierno”, el 18 de marzo de 2011.

⁵¹ Al día siguiente de ser presentada la iniciativa en el Distrito Federal se presentó otra a nivel federal, en base al mismo tipo penal, por la diputada Teresa Incháustegui, presidenta de la *Comisión Especial para conocer y dar Seguimiento Puntual y Exhaustivo a las Acciones que han emprendido las Autoridades Competentes en relación a los Feminicidios registrados en México* de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, iniciativa que resultaría aprobada en abril de 2012.

No comete feminicidio quien, en ejercicio de sus funciones como autoridad de la Fuerza Pública del Estado, prive de la vida a una mujer que se encuentra cometiendo delito en flagrancia.

Esta disposición supone que autoridades del Estado *podrían* cometer un delito de este tipo –que supone conductas graves como violencia sexual, lesiones infamantes, amenazas, etcétera⁵²– “en ejercicio de sus funciones”, cuando la víctima esté cometiendo un delito de modo flagrante. Esta disposición, además, es contraria al espíritu de la norma que agrava los delitos de violación y abuso sexual en los casos en que sean cometidos por autoridades prevaleciéndose de su cargo, prevista en el mismo Código,⁵³ lo que parece mostrar la grave preocupación que genera a nivel político que las autoridades puedan ser acusadas de feminicidio.

Pero más allá de este caso –referido a la autoría en estos delitos– la principal preocupación respecto de las autoridades en la denuncia y el desarrollo teórico y político del feminicidio en México, ha sido la impunidad y la consecuente responsabilidad del Estado por la falta de una debida investigación y sanción de estos crímenes. Y este aspecto no ha sido incorporado en los procesos de tipificación en todas las entidades federativas, a pesar de la importancia que tienen las sanciones –incluso penales– para mejorar la competencia y cultura institucional, como lo señaló la CoIDH en la sentencia del caso *Campo Algodonero*.⁵⁴

La única excepción en este punto se encuentra en la legislación federal que, al tipificar el feminicidio en abril de 2012, incluyó una disposición para integrar de manera expresa la responsabilidad de autoridades que impiden la investigación adecuada de estos crímenes.⁵⁵ Sin embargo, la tipificación a

⁵² De acuerdo al art. 147 bis del Código Penal de la entidad, que señala en su primera parte:

Se entiende que hay feminicidio cuando se presentan algunas de las circunstancias siguientes:

- I. El cuerpo de la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;
- II. A la víctima se le hayan inferido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones, antes o después de haberla privado de la vida;
- III. Existan datos que establezcan que se han cometido amenazas, acoso, violencia o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima;
- IV. El cuerpo de la víctima sea expuesto, depositado o arrojado en un lugar público; o
- V. La víctima haya sido incomunicada sin ánimo de obtención de lucro, cualquiera que sea el tiempo previo a su fallecimiento.

⁵³ De acuerdo al art. 180 del Código Penal de la entidad.

⁵⁴ El párr. 377 de la sentencia señaló que “El Tribunal resalta que *las sanciones administrativas o penales tienen un rol importante para crear la clase de competencia y cultura institucional adecuada* para enfrentar los factores que explican el contexto de violencia contra la mujer que ha sido probado en el presente caso (...)” (Énfasis propio).

⁵⁵ El art. 325 señala del Código Penal federal señala:

Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando concorra alguna de las siguientes circunstancias:

- I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;
- II. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia;
- III. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima;
- IV. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza;
- V. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima;

nivel federal—incluido el feminicidio y esta norma— tiene poco interés práctico, pues la mayor parte de los delitos no cumplen los requisitos necesarios para constituir delitos federales, sumamente excepcionales.⁵⁶ De esta manera, la norma posee principalmente un importante valor simbólico y político.

Otro de los aspectos preocupantes de los procesos de tipificación del feminicidio en México es que, en algunos Estados, la tipificación posee características que generarán una prácticamente nula aplicación de esta nueva figura, no por la complejidad de la acreditación de los elementos del tipo, sino por la inclusión de normas que directamente desincentivan la aplicabilidad de esta figura.

Uno de los casos más graves se encuentra en el estado de Guerrero, la primera entidad que tipificó el feminicidio como un delito específico en México, en diciembre de 2010.⁵⁷ En Guerrero, junto con la tipificación del feminicidio,⁵⁸ se introdujo una disposición por la cual *todo* homicidio de una

VI. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida;

VII. El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público. (...)

Al servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia la procuración o administración de justicia se le impondrá pena de prisión de tres a ocho años y de quinientos a mil quinientos días multa, además será destituido e inhabilitado de tres a diez años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. (...) (Énfasis propio).

⁵⁶ De acuerdo al art. 50 N° I de La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, son delitos del orden federal:

(...) En el caso del Código Penal Federal, tendrán ese carácter los delitos a que se refieren los incisos b) a l) de esta fracción;

b) los señalados en los artículos 2° a 5° del Código Penal (*);

c) los cometidos en el extranjero por los agentes diplomáticos, personal oficial de las legaciones de la república y cónsules mexicanos;

d) los cometidos en las embajadas y legaciones extranjeras;

e) aquellos en que la Federación sea sujeto pasivo;

f) los cometidos por un servidor público o empleado federal, en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas;

g) los cometidos en contra de un servidor público o empleado federal, en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas;

h) los perpetrados con motivo del funcionamiento de un servicio público federal, aunque dicho servicio este descentralizado o concesionado;

i) los perpetrados en contra del funcionamiento de un servicio público federal o en menoscabo de los bienes afectados a la satisfacción de dicho servicio, aunque este se encuentre descentralizado o concesionado;

j) todos aquellos que ataquen, dificulten o imposibiliten el ejercicio de alguna atribución o facultad reservada a la federación;

k) los señalados en el artículo 389 del código penal, cuando se prometa o se proporcione un trabajo en dependencia, organismo descentralizado o empresa de participación estatal del gobierno federal, y

l) los cometidos por o en contra de funcionarios electorales federales o de funcionarios partidistas en los términos de la fracción ii del artículo 401 del código penal.

(*) Los arts. 2° a 5° del Código Penal Federal incluyen ciertos delitos cometidos en el extranjero respecto de los cuales se permite su juzgamiento en México.

⁵⁷ Estado de Guerrero, México. Decreto N.º 493 por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal del Estado de Guerrero. Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero el día 21 de diciembre de 2010.

⁵⁸ Artículo 108 bis. Comete el delito de feminicidio y se le impondrán de treinta a cincuenta años de prisión, al que prive de la vida a una mujer, cuando concurra cualquiera de las circunstancias siguientes:

I.- Para ocultar una violación;

II.- Por desprecio u odio a la víctima;

III. - Por tortura o tratos crueles o degradantes;

mujer cometido por un hombre se considera como “homicidio calificado” y, por lo tanto, se sanciona con *la misma pena* que se asignaba al recién creado feminicidio. Con ello, la figura específica del feminicidio —que requiere la acreditación de más elementos que únicamente el sexo de la víctima y victimario— queda sin posibilidades de aplicación en la práctica, pues simplemente en base al principio de economía procesal, no existe razón alguna para que se investiguen aquellos complejos elementos adicionales, si la pena a ser aplicada es exactamente la misma que del homicidio calificado.

Es similar el caso de Guanajuato, al menos en los casos de feminicidios cometidos por cónyuges o convivientes, pues el tipo penal de feminicidio que se ha introducido en el Código Penal de Guanajuato⁵⁹ exige la acreditación de violencia previa, mientras el tipo penal de homicidio en razón de parentesco, sancionado con la misma pena⁶⁰, simplemente requiere acreditar el matrimonio o la convivencia.

Más grave es el caso de Campeche, donde el delito de feminicidio tipificado en el nuevo Código Penal de la entidad⁶¹ *no contempla pena alguna*, sino que señala que “el delito de feminicidio se sancionará conforme a lo dispuesto por la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia”. Esta disposición, convierte a la disposición en una ley penal en blanco, que no sólo se remite a otro cuerpo legal en un aspecto tan fundamental como la pena, sino que se remite a un cuerpo legal que no contempla la figura del feminicidio —ni ningún otro delito—, y por consiguiente no contempla pena alguna.⁶²

Ahora bien, al analizar los elementos que configuran el tipo penal de feminicidio en las diversas entidades federativas, existe una amplia variedad de formulaciones, y algunas de ellas suponen una severa restricción de los casos que pueden ser calificados como feminicidio.⁶³ En Tamaulipas, por ejemplo, el tipo penal exige que se ejerza “violencia extrema” contra la víctima, así como la concu-

IV.- Exista o haya existido una relación de afecto entre la víctima y el agresor;

V.- Se haya realizado por violencia familiar; o

VI.- La víctima se haya encontrado en estado de indefensión.

⁵⁹ Decreto Legislativo N.º 168, mediante el cual se modifica el nombre y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Guanajuato. Aprobado por el Congreso de Guanajuato el 26 de mayo y publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, el 3 de Junio de 2011 (Sin embargo, la norma entró en vigor el 1 de septiembre del mismo año, fecha en la que también entró en vigencia el nuevo proceso penal acusatorio en la entidad). El feminicidio se tipifica en el art. 153.a del Código Penal, en los siguientes términos:

Art. 153 a.- Habrá feminicidio cuando la víctima sea mujer y sea incomunicada o violentada sexualmente, vejada o mutilada o haya existido violencia intrafamiliar del activo contra ella.

El homicidio así cometido, será considerado calificado para efectos de su punibilidad.

⁶⁰ De acuerdo al art. 156 del Código Penal de la entidad.

⁶¹ El nuevo Código Penal de Campeche entró en vigor en septiembre de 2012, y contempla el feminicidio en su artículo 160.

⁶² La formulación original de la iniciativa de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia (en adelante, Ley General), presentada en febrero de 2006, sí contemplaba la tipificación del delito de feminicidio a nivel federal, pero esta disposición no resultó aprobada en definitiva, y la Ley General sólo contempla una definición de “violencia feminicida”, sin carácter penal.

⁶³ Esta variedad de formulaciones está también presente al comparar las diversas legislaciones latinoamericanas, siendo los casos más extremos los de países como Costa Rica, Chile o Perú, donde el femicidio únicamente comprende los crímenes cometidos por parejas o ex parejas.

rrerencia de “razones de género” que se limitan a dos supuestos: indicios de violencia física reiterada o antecedentes de violencia moral o acoso del sujeto activo hacia la víctima.⁶⁴ Aunque ninguna de estas expresiones supone la existencia de una relación previa entre víctima y victimario, la propia redacción de los supuestos parece requerirla. Por ejemplo, en un caso de violación y homicidio de una mujer por parte de un desconocido, la violación acreditaría el “uso extremo de violencia”, pero esa misma violencia no podría probar la “violencia física reiterada”, pues se estaría utilizando la misma violencia para acreditar ambos elementos del tipo. Esto supone exigir actos de violencia física —que deben ser reiterados— ejercidos de forma previa a la violación —o a las lesiones infamantes, en su caso—, con lo cual parece necesario que el sujeto activo tenga una relación previa con la víctima. Y al exigir antecedentes de violencia moral o acoso es aún más claro, pues la expresión “antecedentes” alude directamente a actos ocurridos con anterioridad al crimen.

Estos ejemplos muestran que, a pesar que el Comité CEDAW ha recomendado que la tipificación del feminicidio “se base en elementos objetivos que permitan su adecuada calificación en los códigos penales locales”⁶⁵, los problemas de la adecuada tipificación no se limitan a tales elementos, pues incluso en algunos casos —como en Guerrero— el problema no se encuentra tanto en la tipificación del feminicidio, sino en la introducción de otra norma que anula sus efectos.

Las organizaciones de mujeres, en particular aquellas que conforman el OCNF, han sido activas promotoras de la tipificación del feminicidio, pero también han criticado abiertamente las leyes e iniciativas que han considerado inadecuadas, como ocurrió con la iniciativa de tipificación de Guanajuato, que estas organizaciones llamaron a no aprobar⁶⁶, o el tipo penal de Tamaulipas, fuertemente rechazado desde el OCNF. También se ha promovido una tipificación adecuada de esta figura en el país a través de la *Campaña nacional por la tipificación del feminicidio que México requiere*, iniciada en abril de 2011 por el OCNF, la Comisión Especial de Feminicidios de la Cámara de Diputados, la Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres —presidida por Marcela Lagarde— y otras organizaciones⁶⁷. Al respecto, cabe destacar que las organizaciones de mujeres no sólo han enfatizado una adecuada tipificación de esta figura, sino también que se implementen los protocolos de investigación necesarios y apropiados para salvaguardar el derecho al acceso a la justicia de las víctimas y sus familias.⁶⁸

⁶⁴ El art. 377 bis del Código Penal para el Estado de Tamaulipas, establece:

Art. 377 bis. Comete delito de feminicidio el hombre que dolosamente, y con uso extremo de violencia, prive de la vida a una mujer por razones de género.

Será sancionado con prisión de 30 a 50 años y multa de mil a cinco mil días de salario mínimo.

Existen razones de género de parte del sujeto activo cuando se realice por alguno de los supuestos siguientes:

I. Si la víctima presenta indicios de violencia física reiterada; o

II. Que existan antecedentes de violencia moral o acoso del sujeto activo en contra de la mujer.

Existe el uso extremo de la violencia, a la víctima cuando:

I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; o

II. Se le hayan infligido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones, previa o posterior a la privación de la vida.

⁶⁵ CEDAW, 2012: párr. 19.a.

⁶⁶ Torres, 2011, 18 de mayo.

⁶⁷ Camacho, 2011, 13 de abril.

⁶⁸ En este sentido, por ejemplo, el *Protocolo de investigación ministerial, policial y pericial del delito de feminicidio*, publicado en

La incipiente aplicación del tipo penal de feminicidio en México

Para evaluar la aplicación de los tipos penales de feminicidio en México y conocer los criterios que se comienzan a aplicar en la esfera judicial para acreditar los elementos de estas nuevas figuras, sería necesario al menos examinar tanto los casos investigados y terminados por este delito —incluyendo especialmente sentencias condenatorias o absolutorias—, así como los casos de muertes de mujeres no calificados como feminicidios y que son investigados bajo figuras tradicionales como homicidio o asesinato.

Sin embargo, junto a las dificultades de acceso a la información judicial en diversas entidades federativas,⁶⁹ es necesario considerar que la mayor parte de las leyes que tipifican el feminicidio en México han sido aprobadas en los años 2011 y 2012, por lo cual, la vigencia de estos nuevos tipos penales es muy reciente, e incluso en varias entidades, esta figura aún no ha sido utilizada —y eventualmente, nunca lo será, como se ha visto en el apartado anterior⁷⁰—. Por ello, en este apartado únicamente se comentarán incipientes líneas jurisprudenciales que se encuentran en las primeras sentencias dictadas en el Estado de México y el Distrito Federal⁷¹, y que apuntan a dos aspectos controvertidos en la interpretación y aplicación de esta figura: primero, la restricción de la aplicación a los crímenes cometidos en la esfera de las relaciones de pareja o familia y, segundo, la peligrosa extensión de la aplicación de esta nueva figura a homicidios cometidos por mujeres.⁷²

Tomando en consideración las primeras diez sentencias dictadas en el Estado de México, todas ellas condenatorias, por delitos de feminicidio cometidos contra ocho mujeres y dos niñas,⁷³ es interesante destacar que todas ellas corresponden a casos en que el crimen había sido cometido por un conocido, pareja o familiar de la víctima. En el caso del Distrito Federal, aunque el número de sentencias dictadas por feminicidio es menor, también allí la mayor parte de los feminicidios que se investigan como tales han sido cometidos por conocidos de las víctimas.⁷⁴

la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 25 de octubre de 2011, que regula la actuación de los diversos organismos —Ministerio Público, Policía y Poder Judicial— frente a estos casos.

⁶⁹ Como se desprende también de las dificultades de acceso a tal información desde organismos judiciales a nivel nacional, como el Programa de Equidad de Género en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (M. Talamás, c.p., 20/11/2012).

⁷⁰ En este sentido, los medios de comunicación no informan sobre aplicación alguna del tipo penal de feminicidio en los Estado de Guanajuato, Tamaulipas ni Guerrero.

⁷¹ Se examina estas normativas porque la legislación sobre feminicidio en el Estado de México y en el Distrito Federal se encuentran dentro de las primeras aprobadas y aplicadas en México, y responden a modelos distintos de tipificación. El Estado de México ha sido el primero en dictar condenas por el delito de feminicidio y lo ha hecho en un mayor número: la primera sentencia por este delito en el Estado de México —y en el país— fue dictada en diciembre de 2011, nueve meses después de la creación de una Fiscalía especializada y la aprobación del nuevo tipo penal en la entidad; y al mes de octubre de 2012, tal Fiscalía informa de 19 sentencias condenatorias por este delito (Fuente: Subprocuraduría para la atención de delitos vinculados a la Violencia de Género, Procuraduría General de Justicia del Estado de México (2012). Dossier sobre el delito de feminicidio en el Estado de México, Octubre de 2012). En tanto, la tipificación del Distrito Federal, si bien no ha tenido tanta aplicación como en el Estado de México, se ha reproducido ampliamente en otras entidades —con ciertas variaciones— como Morelos, Veracruz, Colima, Chiapas, Durango, Tabasco y Sinaloa.

⁷² Este análisis se hace considerando las sentencias que han sido dadas a conocer a través de los medios de comunicación —atendidas las dificultades de acceso a la versión pública de las mismas tanto en el Estado de México como en el Distrito Federal.

⁷³ Un recuento de estos casos se encuentra en Huerta, 2012, 14 de junio.

⁷⁴ Pantoja, 2012, 9 de marzo.

Esto puede indicar tanto la realidad del feminicidio en dichas entidades federativas, o más bien indicar la tendencia de la política de persecución penal que existe en los casos de feminicidios, que no debe desvincularse de la mayor facilidad de reconocer y calificar como feminicidios tales casos, comparados con aquellos en que el agresor es un desconocido. En tal sentido, es necesario tener presente que la impunidad –como consecuencia de la ausencia o deficiente investigación– suele afectar más severamente a aquellos feminicidios que ocurren “en la esfera pública” –como por ejemplo, en el caso de *Campo Algodonero*– en que los cuerpos de las mujeres son encontrados a menudo en el espacio público, y aparentemente son cometidos por *desconocidos* de la víctima. En estos casos, la investigación es más compleja que cuando se trata de una mujer asesinada en su casa o por personas de su entorno cercano, cuando el autor será normalmente un *conocido* de la víctima y a menudo es identificado por familiares o amistades, o hasta puede entregarse personalmente a la justicia, facilitando la investigación.

La mayor presencia de sentencias en feminicidios cometidos por conocidos –que es un fenómeno común también en el resto de los países continente que tipifican el femicidio/feminicidio– deja un margen de duda respecto de la efectividad del funcionamiento del sistema de justicia respecto de aquellos cometidos por desconocidos, cuestión que reviste gravedad si se considera que, en el actual contexto de violencia en México se ha incrementado el número de asesinatos de mujeres vinculados con la acción del crimen organizado, muchos de los cuales constituyen feminicidios. Este contexto, además, a menudo propicia herramientas para complejizar la comisión de feminicidios íntimos o de pareja, por ejemplo, a través de sicarios, fenómeno que no sólo se presenta en México sino también en varios países centroamericanos afectados por formas de violencia similares.⁷⁵

Otro de los aspectos que llama la atención en las primeras sentencias es la aplicación del tipo penal de feminicidio a crímenes cometidos por mujeres, un tema que ha sido objeto de debate teórico a nivel comparado.⁷⁶ En el Distrito Federal se ha dictado una sentencia por feminicidio contra una joven que mató a su madre⁷⁷ y en el Estado de México, a una joven que asesinó a su novia⁷⁸.

El caso del Distrito Federal, a pesar de su excepcionalidad, fue tomado como “ejemplo” de feminicidio en las declaraciones del Fiscal de Homicidios de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a la prensa, ya que evidenciaba el contenido de “odio” en estos delitos, pues la acusada habría declarado que odiaba a su madre⁷⁹. Sin duda, estos casos plantean dudas sobre el nivel de comprensión de la violencia contra las mujeres en general, como un fenómeno que posee características propias que la diferencian de otras formas de violencia en la esfera doméstica, así como del resto de formas de violencia en las relaciones de pareja.

⁷⁵ Carcedo, 2010.

⁷⁶ Diana Russell no se refiere a ellos como femicide, aunque reconoce que muy excepcionalmente puede haber casos de asesinatos contra mujeres por el hecho de serlo, cometidos por mujeres, como por ejemplo, los casos en que las suegras participan de los asesinatos por dote, en que las mujeres son asesinadas por la familia de su marido, por considerar insuficiente su dote (Russell, 2009, p. 28). Ver también Larrauri, 2009: 6; Laurenzo, 2005: 17.

⁷⁷ Alvarado, 2012, 8 de noviembre.

⁷⁸ El Universal, 2012, 21 de febrero.

⁷⁹ Pantoja, 2012, 9 de marzo.

En el caso del Estado de México, la pena más severa dentro de las 10 primeras condenas⁸⁰ fue precisamente la de 58 años de prisión impuesta a la joven que asesinó a su novia, única mujer condenada por feminicidio entre aquellos primeros casos⁸¹. Si bien no es posible analizar en detalle las circunstancias de cada caso, sólo considerando la información que proveen los medios de comunicación, esta severidad es llamativa si se considera la gravedad que revestían otros de los casos, como los dos en que las víctimas habían sido niñas –menores de cinco años– y además había habido violencia sexual, casos en los que las penas impuestas no han superado los 40 años de prisión⁸². La severidad del sistema penal hacia las lesbianas ya ha sido documentada en algunos estudios⁸³ que indican que, al igual que factores raciales y socioeconómicos, ser lesbiana es un factor que hace más probable que una mujer sea juzgada, condenada o condenada a una pena privativa de libertad y, en tal caso, también a condenas más largas⁸⁴.

Lo anterior ha resuelto, por la vía de la práctica jurisprudencial, la que fuera una de las controversias sobre la figura teórica del femicidio / feminicidio, y la posibilidad de que pudiera ser cometido por una mujer.⁸⁵ También en España, donde la actual legislación ha agravado las sanciones en diversos delitos cometidos contra mujeres en el contexto de relaciones de pareja⁸⁶ –aunque no al homicidio–, se ha debatido si la agravación se aplicaría también a los delitos cometidos por mujeres, esto es, relaciones entre lesbianas. A nivel jurisprudencial, sin embargo –a diferencia de lo ocurrido hasta ahora en México–, se ha sostenido que tales sanciones agravadas no son aplicables a parejas lésbicas,⁸⁷ sin perjuicio de que tales actos –al igual que la violencia en parejas gays– se sancionen de acuerdo a las normas de violencia doméstica. Esta opción deja como únicos sujetos activos posibles a los hombres, lo cual se ajustaría tanto a las finalidades preventivas de la norma –al dirigir el mensaje a los potenciales agresores⁸⁸ – como a la mayor lesividad en estas conductas, como ha señalado el Tribunal Constitucional español, al lesionar la seguridad, libertad y dignidad de las víctimas⁸⁹.

Gran parte de estos problemas son consecuencia de una comprensión penal de la violencia contra las mujeres que tiende a “la transformación de un problema social de violencia machista en hechos puntuales”, sin entender las especificidades de la violencia estructural contra las mujeres.⁹⁰

⁸⁰ Considerando que en 8 de los 10 primeros casos, la condena impuesta fue de 40 años de prisión, es decir, la pena mínima prevista para el feminicidio (Huerta, 2012, 14 de junio).

⁸¹ El Universal, 2012, 21 de febrero.

⁸² Huerta, 2012, 14 de junio.

⁸³ Streib, 1995; Robson, 1992 y 2004.

⁸⁴ Robson, 2000: 208.

⁸⁵ Russell, 2001.

⁸⁶ A través de la ya referida Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de Medidas de Protección Integral contra la violencia de género. La agravación es aplicable a los delitos de lesiones agravadas (art. 148), malos tratos (art. 153), amenazas de un mal no constitutivo de delito (art.171) y coacciones (art. 172).

⁸⁷ En este sentido, la Sentencia 66/2010 de la Audiencia Provincial de Cantabria de 2 de marzo, que revocó la sentencia del Juzgado Penal N.º. 2 de Santander, que había condenado en 2009 a una mujer por maltratar a su esposa.

A pesar de ello, de acuerdo al CCPJ, del total de las personas enjuiciadas por los Juzgados de Violencia sobre la Mujer en el primer trimestre de 2012, un 1,2% son mujeres (61 mujeres frente a 4.750 hombres enjuiciados).

⁸⁸ Ruiz, 2006: 44.

⁸⁹ Sentencia del Tribunal Constitucional 9/2008.

⁹⁰ Bodelón, 2012: 353.

Conclusiones

Las recomendaciones formuladas a México sobre la tipificación del delito de feminicidio constituyen el reconocimiento de que la existencia de esta figura en el ordenamiento jurídico penal mexicano es parte de las medidas legislativas que el Estado debe adoptar para cumplir adecuadamente con instrumentos internacionales de derechos humanos como la CEDAW y el PIDCP.

Sin embargo, la implementación de las recomendaciones referidas a la tipificación del feminicidio supone mayores dificultades que cuando se trata de figuras penales expresamente consagradas en los instrumentos internacionales –como ocurre con la tortura y otros crímenes–, pues el feminicidio es una noción amplia desarrollada desde la sociología y antropología feministas, y no se encuentra recogido explícitamente en tales instrumentos. La diversidad en su contenido se ha visto reflejada en las variadas formas que adopta su tipificación a nivel latinoamericano, ya sea bajo la denominación de femicidio o de feminicidio.

La implementación de estas recomendaciones en México se ha transformado en un intenso proceso de tipificación –favorecido también por diversos factores políticos y jurídicos– que ha dado lugar a figuras que presentan, al igual que entre los diversos países latinoamericanos, importantes diferencias entre unas y otras entidades federativas y a nivel federal. Las diversas configuraciones penales –consecuencia de la legítima autonomía normativa penal de las entidades–, sin embargo, en algunos casos dificultan, restringen e incluso impiden la sanción penal de tales crímenes en la práctica, lo que pone de manifiesto los límites de la implementación de esta figura en el país.

Tales dificultades y obstáculos se deben, en algunos casos, a deficiencias en la configuración objetiva de la figura, que suponen problemas para su acreditación –como en Guanajuato y Tamaulipas–, aspecto que ya ha sido abordado por las más recientes recomendaciones sobre tipificación del feminicidio en México⁹¹-. Sin embargo, los problemas más graves asociados a la tipificación exceden a estos aspectos, y se hallan en la virtual inaplicabilidad de algunas de estas figuras por la existencia de otras normas que les quitan toda posibilidad de aplicación práctica –como en Guerrero– o por la ausencia de elementos tan fundamentales para la correcta configuración del delito, como la pena –en el caso de Campeche.

Las tendencias de la incipiente aplicación de estas nuevas figuras, en tanto, también plantean preguntas respecto de los límites de la implementación de las recomendaciones sobre la tipificación. La aplicación mayoritaria de este nuevo delito a crímenes cometidos por conocidos puede ser consecuencia de los desafíos que supone de la persecución penal de aquellos cometidos por desconocidos. En tanto, la aplicación de las sanciones agravadas sobre violencia contra las mujeres a mujeres que agreden a otras mujeres, como ya ha ocurrido en algunas entidades federativas, puede constituir una forma de discriminación contra las mujeres por su orientación sexual⁹² y, en todo caso, una utilización que no se compadece con los fines que han tenido las recomendaciones sobre la penalización del feminicidio.

⁹¹ Comité CEDAW, 2012.

⁹² Bodelón *et al.*, 2009: 255.

La aplicación del delito de feminicidio a mujeres que matan a otras mujeres, desde mi perspectiva constituye una desviación del sentido de una normativa especialmente creada para sancionar la violencia contra las mujeres. Desde una perspectiva social e histórica, las mujeres se encuentran una posición más vulnerable no en abstracto o por sí mismas, sino en el contexto las relaciones sociales con o ante los hombres. Incluso es posible reconocer que la violencia en el ámbito de las parejas gays y de las parejas lésbicas merece un tratamiento específico, pero aquel no es homologable al de la violencia machista⁹³, ni en lo privado ni en lo público.

Estas cuestiones reflejan algunas de las dificultades que supone la implementación de las recomendaciones sobre la tipificación del feminicidio en México, así como sus límites. Si bien tales recomendaciones constituyen un reconocimiento fundamental de lo que implica el adecuado cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres por parte del Estado mexicano, la tipificación se transforma, a su vez, en un nuevo desafío. Probablemente, serán necesarias recomendaciones adicionales de organismos internacionales a fin de precisar el contenido y la extensión que debe tener esta nueva figura penal para favorecer su aplicación atendida la impunidad que mayormente afecta a estos casos, así como su relación con las –hasta ahora prácticamente no abordadas– sanciones por el proceder negligente de las autoridades encargadas de su investigación.

Bibliografía

- Acale, María (2006). *La discriminación hacia la mujer por razón de género en el Código Penal*, Editorial Reus, Madrid.
- Adolfi, Laura; Giusti, Sara; Breveglieri, Agnese; Ottaviani, Elisa; Karadole, Cristina; Venneri, Virginia y Verucci, Cinzia (2010). *Il costo di essere dona: Indagini sul femicidio in Italia. I dati del 2010*. Casa delle donne per non subire violenza di Bologna.
- Bodelón, Encana (2012). *Violencia de género y la respuesta de los sistemas penales*, Editorial Didot, Buenos Aires.
- Bodelón, Encarna; Bonet, Margarita; Garrido, Lorena; Heim, Daniela; Igareda, Noelia y Toledo, Patsilí (2009). La limitada perspectiva de género en la Sentencia del Tribunal Constitucional 59/2008. Comentarios a la STC 59/2008, de 14 de mayo, cuestión de inconstitucionalidad del artículo 153.1 del Código Penal. En: Nicolás, Gemma y Bodelón, Encarna (Comps.), *Género y Dominación. Críticas feministas del derecho y el poder*, Desafío(s) 7, Ed. Anthropos, Barcelona, pp. 247 – 262.
- Campbell, Jacquelyn y Runyan, Carol (1998). Femicide: Guest Editors Introduction. *Homicide Studies*, Vol. 2 (4), pp. 347-352.
- Carcedo, Ana (Coord.) (2010). *No olvidamos ni aceptamos: Femicidio en Centroamérica 2000-2006*, CEFEMINA, San José de Costa Rica.
- Carcedo, Ana y Sagot, Montserrat (2000). *Femicidio en Costa Rica. 1990-1999*, Organización Panamericana de la Salud - Programa Mujer, Salud y Desarrollo, San José de Costa Rica.

⁹³ Bodelón *et al.*, 2009: 251.

CMDPDH (2007). *Feminicidio en Chihuahua. Asignaturas pendientes*, México.

Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM) (2008). *Feminicidio. Monitoreo sobre femicidio/feminicidio en Bolivia, Ecuador, Paraguay, Perú y República Dominicana*, Lima.

CDH (2010). *Examen de los Informes presentados por los Estados Partes de conformidad con el Artículo 40 del Pacto: México*. CCPR/C/MEX/CO/5, 7 de abril de 2010.

CDH (2012). *Informe de la Relatora Especial sobre violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias*, Rashida Manjoo. *Adición: Informe resumido de la reunión del grupo de expertos sobre los asesinatos de mujeres por motivos de género*, 16 de mayo de 2012, A/HRC/20/16/Add.4.

Comité CEDAW (2012), *Observaciones Finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer: México*, 52º periodo de sesiones. CEDAW/C/MEX/CO/7-8, 7 de agosto de 2012

Comité CEDAW (2006). *Observaciones Finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer: México*, 36º periodo de sesiones.

Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), España (2011). *Informe sobre víctimas mortales de la violencia de género y de la violencia doméstica en el ámbito de la pareja o ex pareja en 2011*.

Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) (2004). Dictamen N.º 1485/2004, sobre el “Anteproyecto de Ley Orgánica integral de medidas contra la violencia ejercida sobre las mujeres”, de 24 de junio de 2004.

Crawford, María y Gartner, Rosemary. (1992). *Women killing: Intimate femicide in Ontario, 1974-1990*, Women We Honour Action Comitee. Toronto - Ontario.

Fregoso, Rosa-Linda y Bejarano, Cynthia (Eds.) (2010). *Terrorizing Women. Femicide in the Americas*, Duke University Press, Durham / Londres.

Giari, Sonia (2008). *Femminicidio. Ricerca sulla stampa italiana nell'anno 2007*. Casa delle donne per non subire violenza di Bologna.

Gimbernat, Enrique (2004). Prólogo. En: *Código Penal*, 10ª edición, Tecnos, Madrid.

González-Méndez, Rosaura y Santana-Hernández, Juana (2012). Professional opinions on Violence against Women and Femicide in Spain, *Homicide Studies* 2012, 16 (1) pp. 41 – 59.

Hosseini, Rana (2009). Asesinatos “por honor” en Jordania. En: Agudelo, Irene y Largaespada, Ruth (Eds.), *Fortaleciendo la comprensión del femicidio. De la investigación a la acción*, Program for Appropriate Technology in Health, InterCambios, Medical Research Council of South Africa, World Health Organization; Washington D.C., pp. 119 – 126.

Incháustegui, Teresa y López, María (Coords.) (2011) *Feminicidio en México. Aproximación, tendencias y cambios, 1985 – 2009*, México: ONU Mujeres, Instituto Nacional de las Mujeres (México), Comisión Especial para el Seguimiento de los Feminicidios de la LXI Legislatura, Cámara de Diputados.

Instituto Centro Reina Sofía (ICRS) (2010). *Informe: Mujeres asesinadas por su pareja. España (2000-2009)*. Instituto Universitario para el Estudio de la Violencia / ICRS.

Instituto Centro Reina Sofía (ICRS) (2007). *Mujeres asesinadas por su pareja. España, 2007*.

Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) y Consejo Centroamericano de Procuradores de Derechos Humanos (CCPDH) (2006). *I Informe Regional: Situación y análisis del femicidio en la región centroamericana*, San José de Costa Rica.

Juliano, Dolores (2006). *Les altres dones. La construcció de l'exclusió social. Els discursos que ens uneixen i ens separen*, Institut Català de les Dones, Barcelona.

Karadole, Cristina (2007). *Femminicidi in Italia nel corso del 2006: indagine sulla stampa*. Casa delle donne per non subire violenza di Bologna / Università degli Studi Roma Tre.

Kluger, Viviana (2003). Casarse, mandar y obedecer en el Virreinato del Río de la Plata: Un estudio del deber-derecho de obediencia a través de los pleitos entre cónyuges. *Fronteras de la Historia*, Vol. 8, Instituto Colombiano de Antropología e Historia, pp. 131 - 151.

Kumar, Virendra (2009). Muertes por dote (quema de la novia) en la India. En: Agudelo, Irene y Largaespada, Ruth (Eds.), *Fortaleciendo la comprensión del femicidio. De la investigación a la acción*. Program for Appropriate Technology in Health, InterCambios, Medical Research Council of South Africa, World Health Organization; Washington D.C., pp. 127 - 134.

Lagarde, Marcela (2005). El feminicidio, delito contra la humanidad. En: CEFIRM, *Feminicidio, justicia y derecho*, Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión - LIX Legislatura México, pp. 151 - 164.

Landau, Simha y Hattis-Rolef, Susan (2001). Intimate femicide in Israel: Temporal, social and motivational patterns, *European Journal of Criminal Policy and Research*, Vol. 6, pp. 75 - 90.

Laporta, Elena (2013). España: una restringida acepción de la “violencia de género” y los feminicidios. En: Heinrich Böll Stiftung - Unión Europea. *Feminicidio: Un fenómeno global. De Madrid a Santiago*, Bruselas, Bélgica, pp. 38 - 40.

Larrauri, Elena (2009). Igualdad y violencia de género. Comentario a la STC 59/2008. *InDret: Revista para el Análisis del Derecho* 1 / 2009.

Laurenzo, Patricia (2005). La Violencia de Género en la Ley Integral. Valoración político-criminal. *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*, núm. 07-08, pp. 1 - 23.

Maldonado, Alba Estela (2005). *Feminicidio en Guatemala. Crímenes contra la Humanidad. Investigación Preliminar*. Bancada de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca del Congreso de la República de Guatemala, Guatemala.

Maqueda, María Luisa (2006), La violencia contra las mujeres: una revisión crítica de la Ley Integral, *Revista Penal*, núm. 18, pp. 176 - 187.

Monárrez, Julia (2009). *Trama de una injusticia. Femicidio sexual sistémico en Ciudad Juárez*, El Colegio de la Frontera Norte, Miguel Ángel Porrúa, México, D. F.

Monárrez, Julia (2000). La cultura del feminicidio en Ciudad Juárez. *Frontera Norte*, Vol. 12, N.º 23, enero - junio 2000, pp. 87 - 117.

Nieto-Navia, Rafael (2011). El valor jurídico de las recomendaciones de los Comités de Derechos Humanos y el bloque de constitucionalidad, 18 *International Law*, *Revista Colombiana de Derecho Internacional*, pp. 155 - 190.

Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) ante el Comité CEDAW “*Feminicidio e impunidad en México: Un contexto de violencia estructural y generalizada*”, de fecha 17 de julio de 2012

Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) (2011). *Una mirada al feminicidio en México 2010 - 2011*, México.

Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) (2010), *Una mirada al feminicidio en México 2009 - 2010*, México.

Observatorio Ciudadano Nacional del Femicidio (OCNF) (2008), *Una mirada al feminicidio en México 2007 - 2008*, México.

Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) (2011). *Global Study on Homicide 2011. Trends, contexts, data*.

Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA) (2006). *El feminicidio en El Salvador. Análisis de los protocolos – registros*, San Salvador.

Red Chilena contra la Violencia Doméstica y Sexual / Corporación La Morada (2004). *Femicidio en Chile*, Corporación La Morada, Santiago de Chile.

Robson, Ruthann (2004). Lesbianism and the Death Penalty: A “Hard Core” Case. *Women Studies Quarterly* (32: 3 – 4): Women, Crime and Criminal Justice, pp.181 – 191.

Robson, Ruthann (2000). Crime and Criminology. En: Zimmerman, Bonnie (Ed.), *Lesbian Histories and Cultures: an encyclopedia*, Garland Publishing Inc., Nueva York, pp. 206 – 209.

Robson, Ruthann (1992). *Lesbian (Out)Law: Survival Under the Rule of Law*. Firebrands Books, Universidad de Michigan; Ann Arbor – Michigan.

Russell, Diana (2009). Femicidio: politizando el asesinato de mujeres. En: Agudelo, Irene y Largaespada, Ruth (Eds.), *Fortaleciendo la comprensión del feminicidio. De la investigación a la acción*, Program for Appropriate Technology in Health, InterCambios, Medical Research Council of South Africa, World Health Organization; Washington. D.C., pp. 41 – 48.

Russell, Diana y Caputi, Jane (1990). ‘Femicide’: Speaking the unspeakable. *Ms.*, Septiembre-Octubre / 1990, pp. 34 – 37.

Russell, Diana y Harnes, Roberta (Eds.) (2006). Femicidio: una perspectiva global, UNAM, México. Originalmente publicado en 2001, *Femicide in Global Perspective*, Serie Athene Vol. 57, Teachers College Press. Nueva York.

Russell, Diana y Radford, Jill (Eds.) (2006). *Feminicidio. La política del asesinato de las mujeres*, UNAM, México. Originalmente publicado en 1992: *Femicide: the politics of women killing*, Twayne Eds, Nueva York.

Segato, Rita (2011). Femi-geno-cidio como crimen en fuero internacional de los derechos humanos: el derecho a nombrar el sufrimiento en el derecho. En: Fregoso, Rosa-Linda, Bejarano, Cynthia y Lagarde, Marcela (Eds.), *Feminicidio en América Latina*, UNAM – Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, México, pp. 249 – 277.

Segato, Rita (2006). *Qué es un feminicidio. Notas para un debate emergente*. Serie Antropología, Brasilia

Spinelli, Barbara (2006). *Violenza Sulle Donne: Parliamo di Femminicidio. Spunti di riflessione per affrontare a livello globale il problema della violenza sulle donne con una prospettiva di genere*. Giuristi Democratici.

Stevens and Sons (1935). (Sin título) *The Law Quarterly Review*, Vol. 51.

Streib, Victor (1995) Death Penalty for Lesbians. *The National Journal of Sexual Orientation Law*, Vol. 1, 1, pp. 105 – 127.

Toledo, Patsilí (2013). La violencia contra las mujeres y el femicidio/feminicidio a nivel global y latinoamericano: Las persistentes cifras que interpelan a los Estados. En: Heinrich Böll Stiftung - Unión Europea. *Feminicidio: Un fenómeno global. De Madrid a Santiago*, Bruselas, Bélgica, pp. 5 – 8.

Toledo, Patsilí (2010). Tipificación del femicidio / feminicidio: Otra vía hacia el abandono de la neutralidad de género en el Derecho penal frente a la violencia contra las mujeres. En: Bodelón, Encarna y Heim, Daniela (Coords.), *Derecho, Género, Igualdad*, Vol. 2, Grupo Antígona, de la Universidad Autónoma de Barcelona, pp. 163 – 178.

Toledo, Patsilí (2009). Leyes sobre Femicidio y violencia contra las mujeres. Análisis comparado y problemáticas pendientes. En: Red Chilena contra la Violencia Doméstica y Sexual, *Tipificación del feminicidio en Chile. Un debate abierto*, Andros, Santiago de Chile. pp. 41 a 50.

Toledo, Patsilí (2009). *Feminicidio*. Consultoría para la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, Ciudad de México.

Subprocuraduría para la atención de delitos vinculados a la Violencia de Género, Procuraduría General de Justicia del Estado de México (2012). Dossier sobre el delito de feminicidio en el Estado de México, Octubre de 2012

Widyono, Monique. (2009) Introducción. En: Agudelo, Irene y Largaespada, Ruth (Eds.), *Fortaleciendo la comprensión del femicidio. De la investigación a la acción*. Program for Appropriate Technology in Health, InterCambios, Medical Research Council of South Africa, World Health Organization; Washington D.C., pp. 15 – 39.

Sentencias

México, Sentencia del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. Amparo en revisión 83/2012. 20 de septiembre de 2012. [TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 2; Pág. 1333.

España, Sentencia del Tribunal Constitucional 59/2008, de 14 de Mayo de 2008, Cuestión de Inconstitucionalidad del Artículo 153.1 del Código Penal (en su redacción vigente, resultante de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre).

España, Audiencia Provincial de Cantabria, Sentencia 66/2010 de 2 de marzo.

Artículos de prensa

Alvarado, Noel (2012, 8 de noviembre). Dieron 30 años a mujer que asesinó a su madre, La Prensa. Policía. <http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n2763180.htm> [Consultado el 10 de febrero de 2013]

Camacho, Fernando (2011, 13 de abril). La Jornada, Promueven campaña sobre correcta tipificación del delito de feminicidio, disponible en <http://www.jornada.unam.mx/2011/04/13/sociedad/050n2soc> [Consultado el 10 de febrero de 2013]

El Universal (2012, 21 de febrero). Mujer asesina a su novia en Edomex; pasará 58 años en la cárcel, El Mexicano. Nacional. <http://www.el-mexicano.com.mx/informacion/noticias/1/2/nacional/2012/02/21/548891/mujer-asesina-a-su-novia-en-edomex-pasara-58-anos-en-la-carcel.aspx> [Consultado el 10 de febrero de 2013].

Gómez, Ricardo (2011, 12 de enero). Desechan declarar alerta por feminicidios en el Edomex. El Universal. <http://www.eluniversal.com.mx/primer/36174.html> [Consultado el 10 de febrero de 2013].

Huerta, Josué (2012, 14 de junio). Feminicidios a castigo, El Universal, <http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/112045.html> [Consultado el 10 de febrero de 2013].

Pantoja, Sara (2012, 9 de marzo). PGJDF: lidera odio en los feminicidios. El Universal. <http://www.eluniversaldf.mx/alvaroobregon/nota43264.html> [Consultado el 10 de febrero de 2013].

Torres, Gladis (2011, 18 de mayo). Llamen a no aprobar “fast track” ley de feminicidio en Guanajuato, Cimac Noticias, <http://www.cimacnoticias.com.mx/site/11051807-Llamen-a-no-aprobar.47056.0.html> [Consultado el 10 de febrero de 2013].